TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA

Sala Civil Familia

Bogotá D.C., treinta de septiembre de dos mil veintidós

Referencia 25899-31-10-002-2019-00441-00

Se decide el recurso de apelación de la parte demandante contra el auto de 18 de marzo de 2021, proferido por el Juzgado Segundo de Familia de Zipaquirá, dentro del proceso declarativo de Sergio Iván Nieto Tovar contra Consejo Bello de Nieto, Mauricio Emiro, Jorge Ricardo, Javier Fernando y Andrés Felipe Nieto Bello.

ANTECEDENTES

1. La demanda pretendió -de manera principal-, que se declarara la nulidad absoluta de la partición y adjudicación de bienes presentada en el proceso de sucesión del causante Argemiro Nieto Silva, aprobada mediante sentencia de 31 de enero de 2012 y que, en consecuencia, se ordenara la cancelación de la inscripción de las adjudicaciones efectuadas en los folios de matrícula inmobiliaria Nos. 176-34000, 17-3616, 176-14678, 176-51992, 176-6063, 176-65138, 176-67554, 176-67640, 176-9082, 176-188, 176-11661, 176-27727, 176-

3608, 176-58725. 170-35979, 172-13209, 172-26422, 172-4438, 172-4440, 176-20846, 170-8079, 170-5368.

Además, que se ordenara la restitución al haber social del valor recibido por la venta de la franja de terreno del predio denominado *"La Fortuna"*, para la construcción de la vía *"Los Comuneros Zipaquirá Ubaté"*, por el cual la señora Consejo Nieto Bello recibió la suma de \$1.900.000.000; de igual manera, que se ordenara a dicha adjudicataria, reconocer en favor de la sucesión del causante Nieto Silva, los intereses que -a la máxima- hubiere podido generar la suma de dinero mencionada; finalmente, que se ordenara la cancelación de los registros de transferencia de la propiedad, gravámenes y limitaciones al dominio realizados sobre bienes adjudicados ilegalmente, así como los actos efectuados con posterioridad a la inscripción de la demanda, y que se condenara solidariamente a los demandados al pago de los perjuicios en la cantidad que resultara probada, así como a restituir a la sucesión la posesión de los bienes y los aumentos, accesorios, productos y frutos percibidos.

De manera subsidiaria se pretendió la declaración de rescisión por lesión enorme del trabajo de partición aludido, volviendo las cosas a su estado inicial, junto con las declaraciones de la súplica principal, empero, a favor del demandante.

Al efecto se expuso, en lo fundamental que Argemiro Nieto Silva falleció el 2 de diciembre de 2002 en Zipaquirá, siendo éste su último domicilio; la sucesión intestada de tal causante se tramitó ante el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Zipaquirá; en el proceso fueron reconocidos Consejo Nieto Bello como cónyuge sobreviviente y como herederos a Mauricio Emiro, Jorge Ricardo, Javier Fernando y Andrés Felipe Nieto Bello, Diego Orlando Nieto Duarte y Sergio Iván Nieto Tovar, este último entonces menor de edad, representado por su progenitora Dora Elsa Tovar; mediante autos de 13 de junio y 24 de agosto de 2011, se reconoció una cesión respecto de los derechos que a título universal le correspondieran al heredero Diego Orlando Nieto Duarte.

Se adujo, además, que mediante autos de 22 de octubre de 2009 y 16 de junio de 2010, se aprobaron la totalidad de los inventarios y avalúos presentados por las partes en el proceso; el pasivo relacionado por la cónyuge sobreviviente fue rechazado mediante auto proferido en la diligencia de inventarios y avalúos de 1º de octubre de 2009; mediante auto de 21 de noviembre de 2011 se accedió a la solicitud de nombrar como partidores a los apoderados reconocidos dentro del proceso; el 12 de diciembre de 2012 se presentó de común acuerdo, el escrito de partición y adjudicación de bienes, el cual está viciado de nulidad por la falta del consentimiento, ilegalidad por asignación con un detrimento patrimonial y formación de una hijuela de gastos donde se establece

un pasivo a favor de la cónyuge sobreviviente pese a que éste fue denegado en la diligencia de inventarios y avalúos mencionada.

De igual manera, se estableció que, mediante providencia de 31 de enero de 2012 el juzgado impartió aprobación al trabajo partitivo; se tuvo conocimiento recientemente de que previo a la apertura de la sucesión, la Agencia Nacional de Infraestructura había hecho una oferta de compra por la franja del terreno *“La Fortuna”* para la construcción de la vía *“Los Comuneros Zipaquirá Ubaté”*, por el valor de \$1.852.825.490, negociación que vino a perfeccionar la cónyuge sobreviviente de conformidad con la escritura 2844 de 19 de octubre de 2012, hasta después de haberse finiquitado la sucesión.

Por otro lado, se indicó que los bienes relacionados en el activo de la partición se adjudicaron por un valor total de \$3.215.710.600, no obstante, de conformidad con su avalúo comercial, se prueba que para el año 2010, momento en el cual se confeccionaron los inventarios, su verdadero valor era de \$49.603.489.942, sin estar incluida en esta suma el valor comercial de las acciones de dos empresas de transporte referidas en la demanda.

Finalmente, se señaló que a la cónyuge sobreviviente se le adjudicó el 87.9148% del valor total de la herencia, habiendo recibido entonces un 37.9148% más de lo que legalmente le

correspondía; que al demandante le fue adjudicado un derecho inferior al 50% del que realmente le correspondía, pues su porción de la herencia ascendía a 8.3336% recibiendo solo un 1.5009%; y que el detrimento patrimonial que constituyó lesión enorme afectó también a los demás herederos.

2. El despacho de primer grado inadmitió el libelo -auto del 9 de diciembre de 2019- con miras a que su promotor allegara prueba de la calidad en la que concurría al proceso, prueba de la calidad en que citaba a los demandados, además de que indicara los supuestos de hecho sobre los cuales se fundamenta la nulidad de la partición, en concordancia con los artículos 1405, 1740 y 1741 del Código Civil. Por último, lo requirió con miras a que aportara copia auténtica de la escritura pública mediante la cual se protocolizó la sentencia aprobatoria de la partición y el trabajo de partición del causante.

3. La demanda fue rechazada con el auto materia de apelación tras estimar la funcionaria que, si bien se subsanó en oportunidad, no se dio cumplimiento al numeral 4º del auto de inadmisión, en el sentido de que no se allegó la copia auténtica de la escritura de protocolización requerida, de donde concluyó que al no estar protocolizada la partición que se pretende rescindir, se tornaban improcedentes las pretensiones.

4. Al sustentar el recurso de apelación contra la resumida decisión la parte demandante alegó que la protocolización de la partición y la sentencia aprobatoria no se encuentran contempladas como requisito formal para la presentación de la demanda, por ende, no es causal de inadmisión ni rechazo de conformidad con el artículo 90 del C.G.P. Además, expuso que dicha protocolización no es requisito para iniciar el trámite judicial, siendo que ni siquiera resultaba necesaria la partición, teniendo en la cuenta que esta causa está siendo tramitada en el despacho donde reposa tal escrito.

Añadió que no ha sido posible realizar la protocolización de la sentencia aprobatoria de la partición, dado que el expediente original del proceso de sucesión del causante se encuentra actualmente en el despacho, pues tras proferir el fallo, éste ha sido objeto de múltiples peticiones por parte de los interesados, manteniéndolo activo. Adujo que, en todo caso, tanto en la demanda como en su escrito subsanatorio, en el acápite de pruebas, incluyó *"...documentos en poder del Juzgado Segundo de Familia de Zipaquirá"*, donde solicitó que se ordenara el traslado de la demanda de sucesión del señor Argemiro Nieto Silva, para que sirviera de prueba en el proceso de la referencia.

CONSIDERACIONES

Desde el umbral se evidencia que el auto fustigado deberá ser revocado, pues no se observa conforme con las normas

procedimentales en vigor que la exigencia contenida en el auto de inadmisión, relativa a la aportación del documento que dé cuenta de la protocolización de la partición cuestionada y de su sentencia aprobatoria, de donde se sigue que tampoco devino ajustado a derecho el rechazo de la demanda que dispuso la juez *a-quo*, todo, según las breves explicaciones que se exponen en las líneas que siguen.

En primer lugar, recuerda el tribunal que el estudio de las determinaciones esgrimidas en el auto de inadmisión de la demanda queda comprendido en esta alzada por así disponerlo el inciso 3° del numeral 7° del artículo 90 del C.G.P. Dicho lo cual, se tiene que tal y como se argumentó al sustentarse la apelación, la protocolización de la sentencia aprobatoria de la partición de la herencia no está contemplada en el ordenamiento jurídico como requisito formal e imperativo para dispensar la admisión de una demanda donde se pretende atacar la eficacia de dicho documento, siendo que la inadmisión y eventual rechazo del libelo inicial solo resulta procedente por los motivos puntuales establecidos por el legislador, uno de los cuales, se insiste, no es allegar la prueba de la protocolización, máxime cuando la ausencia de ésta no impide abordar el estudio del fondo de la controversia o de las reprobaciones de índole sustancial que han sido invocadas.

En armonía con lo anterior no se pierda de vista que al tenor de los artículos 56 y 57 del Decreto 960 de 1970 *“la protocolización*

consiste en incorporar en el protocolo por medio de escritura pública las actuaciones, expedientes o documentos que la Ley o el Juez ordenen insertar en él para su guarda y conservación, o que cualquiera persona le presente al Notario con los mismos fines”, haciéndose la salvedad de que *“por la protocolización no adquiere el documento protocolizado mayor fuerza o firmeza de la que originalmente tenga*”, de donde se sigue que la sentencia aprobatoria del trabajo de partición de la herencia, en sí misma considerada, está llamada a causar efectos jurídicos, siendo su protocolización no más que una formalidad, que no un requisito *sine qua non* que se erija como condición necesaria para poder incoar acciones como las referidas en el libelo inicial.

Por otro lado, resulta indispensable tener en la cuenta que la parte actora ha hecho énfasis en que el expediente de la sucesión se encuentra todavía en el despacho donde de manera concomitante se le da trámite al presente proceso, por lo que ha solicitado que sea tenido como prueba trasladada, siendo esta una razón adicional para considerar que la exigencia de la protocolización en cuestión no tiene lugar, máxime si se considera que el eventual estado activo del mismo, como también lo aseguró la parte actora.

La determinación atacada será entonces revocada; en su lugar, se dispondrá que la juez *a-quo*, si se cumplen los demás requisitos para la admisión de la demanda, provea sobre el particular.

DECISIÓN¹

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, **revoca** el auto apelado y, en su lugar, ordena al juzgado de primer grado que, en caso de hallarse colmadas las demás exigencias de ley, disponga la admisión de la demanda *sub-examine*.

En firme devuélvase la actuación a la oficina de origen.

Notifíquese,

Firmado electrónicamente

JAIME LONDOÑO SALAZAR

Magistrado

¹ Para la resolución de la presente actuación constitucional se conformó el respectivo expediente de manera virtual, ello, siguiendo el protocolo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura. Dicha actuación podrá ser consultada a través del link https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jlondons_cendoj_ramajudicial_gov_co/EhITiXYA_F5Bu5VxYxLYVBEBDRGU8r5vhQ1teLEgZgXbEw?e=SZWh0l

Firmado Por:
Jaime Londono Salazar
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 003 Civil Familia
Tribunal Superior De Cundinamarca - Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **299a011de6b1e18e4d4a8f7a83df9f5aba0d33ff477d26cc5c97fed1240c7379**

Documento generado en 30/09/2022 09:34:32 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>